

sonas²⁹ de la provincia de las cuales aproximadamente 40.000 fueron alojadas en albergues en el área metropolitana.

El 50 % de la población y el 70 % de la superficie del Gran Resistencia se vio, en mayor o menor medida, afectada directamente por la inundación, o bien de manera indirecta como fue la imposibilidad de desagotar las cloacas, o las dificultades para desplazarse habitualmente, o para mover la producción. La prestación del servicio de energía eléctrica tuvo dificultades ante la necesidad de abastecer los centros de bombeo de la ciudad hacia el río. Los desagües pluviales se transformaron en conductores del río hacia la ciudad, invirtiendo su función normal. Hubo desbordes por bocas de tormentas y escurrimiento de aguas servidas. La napa freática se elevó causando la saturación de los pozos negros y su inutilización. El acceso a los depósitos de basura fue imposible y el personal y equipo afectados al servicio de recolección de residuos fueron derivados a las obras de defensa. La vida cotidiana fue interrumpida parcialmente y disminuyó la asistencia escolar debido a la inundación o al deterioro de los locales. Los comedores escolares, básicos para la dieta de los niños, sobre todo los marginales, debieron en parte dejar de funcionar. Sobre 945 escuelas primarias de la provincia el 27 % (258 edificios escolares) se encontró inundado y 72 edificios fueron utilizados como albergues. La población escolar afectada (imposibilidad de asistir a clase por hallarse la escuela inundada o designada como albergue) alcanzó el 46,24 % del total de la población escolar provincial.³⁰

A estos problemas debe sumarse el estado nutricional y sanitario. Según datos de 1982, el 44 % de la población infantil (menores de 5 años) de Resistencia³¹ presentaba un estado de desnutrición considerable. El costo de la alimentación de 1.000 calorías de una familia integrada por 5 personas, en mayo de 1983, representaba el 82,5 % de su ingreso efectivo (calculado para un empleado público provincial para la categoría más baja). Podría suponerse que para la población marginal con trabajo inestable esta relación costo/ingreso sería más alta y que por otra parte las familias damnificadas por las inundaciones agudizaron, durante este período, su inestabilidad laboral.³² Efectivamente, en abril de 1983 se estimaba la tasa de desocupación del Chaco en un 6,5 % y la población activa subremunerada en un 23,3 %.³³

Cuando ocurren las inundaciones y se producen nuevos desajustes se estima que alrededor de 15.000 personas pierden su trabajo y vivienda. Los albergues o refugios precarios donde es localizada la población significan hacinamiento y promiscuidad, y en poco tiempo elevarán la tasa de natalidad. Tanto es así que en un año se registró un aumento en el número de embarazadas entre solteras adolescentes

²⁹ Informe del Comando de la Zona de Emergencia (COZENE), del 30 de junio de 1983. Buenos Aires, Argentina.

³⁰ Informe de la situación de emergencia del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, setiembre de 1983. Chaco, Argentina.

³¹ Encuesta de Salud, Ministerio de Salud, Provincia del Chaco; población infantil total encuestada: 11.470 niños.

³² Si se toma en cuenta la población del Gran Resistencia con necesidades básicas insatisfechas —siendo este un indicador importante de pobreza crítica— la misma asciende para el mismo año a 75.749 habitantes (35,3 % de la población).

³³ Encuesta permanente de hogares, 1983, Provincia del Chaco.

que pasaron de 604 casos en 1982 a 1.126 en 1983, registrándose mayores riesgos por nacimientos. En 1983 el 70 % de los partos fueron prematuros (menores de 2 kg).

En el último año, y como consecuencia de las inundaciones, la situación alimentaria de la población ha empeorado. Por un lado la relación costo-ingreso es del 97 % del salario familiar y ello se debe, por una parte, a la crisis económico-social que vive el país pero por otra, a la disminución de la disponibilidad alimentaria para consumo de la población de bajos ingresos en razón del deterioro de las zonas frutihortícolas del Gran Resistencia que proveían el 70 % de la producción. Su anegamiento generó, por un lado, desempleo y, por el otro, un desequilibrio en el mercado local, dando lugar a aumentos descontrolados en el precio de esos productos.

Desde el punto de vista sanitario, a pesar que los factores ambientales debieran indicar lo contrario, la mortalidad infantil (menores de 1 año) no aumentó y ello se debió quizás a un mejor uso que hizo la provincia de sus recursos sanitarios a través del programa de atención primaria a la salud. La existencia de una red descentralizada de salud, con un equipo médico funcionando orgánicamente desde hace años permitió, en el plazo de duración de las inundaciones, un mejor control de los casos de desnutrición así como de las enfermedades infecto-contagiosas que se fueron detectando. Si bien se registró una mayor morbilidad, el nivel de asistencia aplicado permitió que la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) no aumentara.

El otro factor que puede haber influido fue el de la asistencia alimentaria. Durante unos meses la municipalidad así como los organismos no gubernamentales distribuyeron semanalmente viveres a las familias evacuadas, equivalentes a unas 2.000 calorías. Estas raciones cubrieron de manera poco sistemática a la población, pues dependía de las donaciones efectuadas y se hacía con una insuficiencia crítica de equipamiento que impidió, entre otras cosas, una recopilación de información como para poder evaluar su eficacia. No obstante, habría que efectuar algún tipo de evaluación del estado alimentario-nutricional de la población, de manera de poder cotejar los datos obtenidos previos al impacto con la situación actual. El incremento de la actividad física estimulada por las relocalizaciones sucesivas de la población deben haber alterado el gasto total energético necesario para mantener las funciones del cuerpo y la temperatura y si este desgaste no ha sido compensado por una alimentación adecuada, 1.000 ó 2.000 calorías en esas condiciones no parecen suficientes. Esta sobreexigencia quizá produzca la aparición de patologías aún no detectadas.

La inundación hizo resaltar los aspectos más patéticos de la situación regional depresiva y agregó otro; por un lado la relativa urgencia en resolver el problema de los sectores marginales y por otro la movilización tanto interna como externa que generó. Efectivamente, la evacuación de la población damnificada sufrió dos procesos: el de auto-evacuación y el de evacuación dirigida. La población que debió auto-evacuarse se ubicó principalmente en las viviendas de familiares y amigos creando, en los barrios asentados en sitios altos, verdaderos centros de hacinamiento al sobreponerse una parte de la población directamente afectada al resto de la población que allí vivía y que se conmovió por el impacto urbano producido, albergando a sus allega-

dos. La segunda forma de evacuación fue dirigida por sectores del gobierno aislados entre sí, enfrentándose con un alto grado de improvisación, desorganización y descoordinación. La relocalización de la población, en refugios transitorios y precarios ubicados en sitios bajos y temporarios, se efectuó a medida que subía el agua y se producían los desplazamientos inevitables de esos sectores por la ciudad. Se llegaron a comprobar hasta 8 ó 9 evacuaciones sucesivas. Aproximadamente un centenar de familias, al no hallar respuestas concretas de realojamiento, ocupó viviendas en construcción o deshabitadas (pertenecientes a los planes habitacionales oficiales); se los declaró intrusos y se les inició acciones judiciales que aún no han sido resueltas. Unas 640 fueron relocalizadas en asentamientos precarios, en una zona relativamente alta, en tierras fiscales cedidas por la Municipalidad.

Con respecto a la movilización interna, la inundación confirió a la población marginal una cierta autorización de hecho para confundirse con el resto de los sectores de la sociedad, que puede definirse como la asignación de un espacio social, el cual no significa privilegios y/o beneficios. Es esta asignación la que permite a la población marginal reclamar a las instituciones del Estado que, a través de sus programas de emergencia, de alguna manera legitimaron la existencia de estos sectores en tanto debieron ocuparse de ellos aunque sea porque no tuvieron más remedio que hacerlo.

Una vez terminada la emergencia, cuando la asistencia oficial se dio por terminada, los pobladores debieron buscar una reubicación por sí mismos, y ese espacio social ganado se fue perdiendo porque no se aprovechó para el desarrollo de una conciencia comunitaria a través de una organización propia. Es cierto que la acción del Estado durante el período crítico fue básicamente autoritaria e intimidatoria y condujo a que mucha de la energía existente, y atesorada por parte de la comunidad, se perdiese porque la misma actitud oficial limitaba los grados de libertad organizativa comunitaria que los pobladores estaban dispuestos a ejercer. Todo intento de organización en los albergues fue sistemáticamente impedido.

El regreso a los lugares que ocupaban antes de la inundación o a nuevos sitios fiscales (bajos e inundables) además de la dispersión de esfuerzos que ha significado y de la nueva pérdida de los vínculos creados durante la emergencia, contribuyó al relego de estos grupos sociales. Estas mudanzas disminuyeron nuevamente su visibilidad.

ACCIONES FRENTE A LA EMERGENCIA

Por lo general, en las regiones afectadas por desastres naturales, ya sean de países desarrollados o subdesarrollados, existen distintos tipos de respuestas que apuntan a objetivos diferentes. Por un lado surgen respuestas frente a la emergencia en sí, de tipo puntual y asistencial y que son inevitables porque de alguna manera debe enfrentarse la catástrofe. Luego surgen las respuestas reparatorias, a corto plazo, que se destinan a poner en movimiento un desarrollo que ha quedado interrumpido. (Por más que la región se encuentre entre las más atrasadas del país, tiene un cierto desarrollo y una dinámica que el desastre interrumpe.) Se trata, entonces, de poner en marcha

planes de emergencia que contengan acciones puntuales y que permitan una cierta normalización de la situación. Y por último, están las respuestas a más largo plazo que se relacionan con el desarrollo integral de una región sometida a procesos de inundación y sequías recurrentes, procesos a los cuales debe darse soluciones de orden estructural. Estas últimas son medidas a mediano y largo plazo que incluyen planes de defensa, la implementación de sistemas de alerta, la planificación de sistemas de evacuación, la reglamentación estricta del uso del suelo y control del mismo, la relocalización de la población, la zonificación y determinación de grados de riesgo, el control sanitario y nutricional permanente, la educación de la población, y las decisiones respecto al uso y manejo de los recursos.

Casi todas las acciones desplegadas en la Argentina con motivo de las inundaciones pueden encuadrarse en el primer tipo de respuesta; más aún, fueron improvisadas a medida que se sucedían los acontecimientos y no correspondían a un plan coordinado entre los diferentes sectores, instituciones y organismos que se movilizaron para estos fines.

Mal que bien las autoridades provinciales movilizaron en los momentos máximos de la emergencia sus recursos disponibles, fundamentalmente alimentos para evacuados, medicinas, colchones y frazadas. En esa labor fueron secundadas por el Gobierno de la Nación en una colaboración netamente sectorial y descoordinada que, como suele suceder en casos de contingencia, se agotó una vez superada la fase crítica. Pero en ningún momento, ni durante el desastre ni después de él, se planteó una concepción unificada del problema que permitiese coordinar soluciones armónicas y encarar acciones que se continuasen en el largo plazo, pensando que la inundación se extiende en el tiempo, más allá del momento en que se supera el fenómeno natural.

Internacionales

Dentro de las respuestas frente a la emergencia, se incluye la asistencia de los organismos internacionales y con ello nos referimos fundamentalmente al sistema de Naciones Unidas (UNDRO, UNICEF, PNUD, PNUMA, etcétera), asistencia que se efectiviza en el momento en que el gobierno damnificado la solicita, determinando qué tipo de apoyo requiere. En la Argentina existió desde el comienzo de las inundaciones un ofrecimiento de ayuda por parte de la comunidad internacional, vía Naciones Unidas. En ese momento el gobierno se consideraba autosuficiente frente al desastre pues sólo quería movilizar sus recursos internos. Recién después de un año del inicio del desastre, en agosto de 1983, el gobierno decidió solicitar oficialmente la colaboración ofrecida, la cual se tradujo en donaciones al Programa de Socorro de la Cruz Roja y en una serie de diagnósticos y recomendaciones que no derivaron aún en líneas de acción.

Hubo sólo tres misiones de cooperación técnica internacional, promovidas por la FAO, HABITAT y OMS/OPS. Las dos primeras derivaron en proyectos que aún hoy no se han implementado (véase anexo I).

Estas misiones contienen valiosas sugerencias que serán de gran

utilidad siempre y cuando existan acciones coordinadas que se inserten dentro de planes de desarrollo de la región e incluyan la participación de la población en las decisiones que se adopten.

Nacionales

Todas las acciones encaradas por el Estado Nacional durante la emergencia fueron simplemente asistencialistas. No existió una visión integradora del problema y las respuestas se tradujeron en solidaridades momentáneas y sectoriales, predominando las rivalidades por encima de una acción coherente y coordinada.

El Poder Ejecutivo Nacional decide declarar en emergencia a la zona inundada casi un año después de iniciada la inundación constituyendo el Comando de Emergencia de la Zona del Nordeste (COZENE)³⁴ con asiento en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ajena a las inundaciones. Su objetivo era cooperar y coordinar los esfuerzos y actividades que realizaban los medios civiles, militares, nacionales y provinciales. Teóricamente el COZENE debía recibir los requerimientos provinciales, controlar la situación y detectar los problemas potenciales para inmediatamente solicitar la intervención del sector involucrado que debía operar a través del COZENE. Decimos teóricamente porque no todos los requerimientos ni la ayuda se hacían a través de este comando; esto significó que realmente no existió un ente coordinador ni centralizador de la emergencia.

A nivel sectorial, y habiéndose analizado cada uno de los sectores involucrados, no se pudieron detectar medidas diferenciales, salvo medidas de postergación impositiva que se demoraron en poner en práctica, o medidas crediticias de muy alto costo y que dado el estado de endeudamiento de los beneficiarios se utilizaron en pagar créditos anteriores.

Todas las acciones se volcaron hacia la asistencia social que, por lo demás, no fue equitativa para todos los damnificados. Se enviaban a la provincia medicamentos, alimentos, ropas y elementos de primera necesidad (colchones, frazadas, linternas, etc.) obtenidos mediante campañas de solidaridad y que eran distribuidas al azar entre la población evacuada. Para el Gobierno Nacional como para el provincial, el período crítico finalizó cuando el río comenzó a descender e interrumpió la asistencia a la población a pesar que la población se encontraba aún en calidad de evacuada y los sitios continuaban inundados.

Solamente se prepararon proyectos, sin que aún se hayan materializado, en el sector vivienda y recursos hídricos. Para el sector vivienda, por un lado, está pendiente una operatoria colectiva del Banco Hipotecario Nacional destinada a la población de bajos recursos y, por el otro, un proyecto de construcción de viviendas a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) para 300 familias de inundados.

En lo relacionado con recursos hídricos se está trabajando, desde hace un año, en un plan de estudios, proyectos y obras, pero el manejo de las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay todavía no derivó

³⁴ El río Paraná comenzó a desbordar el 2 de julio de 1982 y se declaró zona de emergencia al noreste argentino recién el 24 de mayo de 1983.

en ninguna acción concreta, salvo la creación de un centro de prevención y alerta en el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires), que recibe y transmite la información sobre el estado de los ríos en la alta cuenca. A nivel provincial, y por un convenio con Agua y Energía Nacional, se está trabajando sobre el Plan de Defensas definitivo de la ciudad de Resistencia ya mencionado anteriormente (véase anexo II).

Organismos no gubernamentales

Los organismos no gubernamentales¹⁵ han encarado, con fondos de origen internacional, proyectos ligados con el realojamiento de la población carenciada basados, al menos en su enunciación, en principios de desarrollo comunitario.

Todos los organismos no gubernamentales tuvieron una doble reacción frente al impacto. Por un lado trabajaron durante la crisis enviando elementos y materiales, que sus contrapartes locales distribuyeron. Por el otro, intentaron desarrollar proyectos comunitarios con la participación de la población afectada. Estos parecieran ser los más perdurables porque presuponen la relocalización de la población en sitios a resguardo de futuras inundaciones y, en algunos casos, el suministro de materiales para poner en marcha la economía familiar.

Lamentablemente, la participación de los organismos no gubernamentales fue aislada y descoordinada entre ellos como con los organismos gubernamentales debido a que no existió un ente de coordinación, en primer lugar, de las acciones frente a la emergencia y posteriormente de las medidas reparatorias.

CONCLUSIONES

El rol del Estado nacional durante el período de mayor impacto fue neutral, absteniéndose de operar como regulador, compensador y coordinador de las insuficiencias o incapacidades que demostraba el Gobierno provincial y que la situación demandaba. La inacción del Estado, en sus distintos niveles, fue tratada de compensar parcialmente por la acción descoordinada de los organismos no gubernamentales que por sus mismas características no podían cubrir por sí mismos la totalidad de los sectores y regiones demandantes.

Quizá la idea dominante que en su momento tuvo el Gobierno era que una vez pasada la emergencia, su asistencia era innecesaria. Pero este pensamiento debía basarse en alguna racionalidad y ésta puede encontrarse en adjudicar a los fenómenos naturales —lluvias, crecientes— la única y directa responsabilidad de toda la situación que se vivía en el área y que afectaba la vida económica y social de la población. De esta manera, en la concepción oficial de los progra-

¹⁵ Entre los organismos no gubernamentales que han participado y algunos que aun lo están haciendo, podemos mencionar a la Cruz Roja, Caritas, la Federación Luterana Mundial, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, etcétera.

* FAO: Food & Agriculture Organization.

mas, se fue plasmando la noción de una cadena causal: lluvias, crecientes, inundación, carencia de techo, de alimentos, desnutrición, y cuando cesasen los primeros factores de la cadena los últimos se revertirían por sí mismos.

La adopción del programa de solidaridad social por un corto periodo de tiempo para las provincias afectadas, estuvo precedida por la hipótesis que la asistencia en sí misma podía tener un impacto decisivo sobre la situación en que se hallaban los inundados independientemente del volumen, efectividad o eficiencia organizativa y que merecerían un capítulo aparte. Era una noción basada en paliativos o socorros que jamás tendría efecto perdurable.

Esta cadena funciona en realidad como una unidad, con mutuas retroalimentaciones que son las que nosotros tomamos como punto de partida de esta evaluación y que nos indican, bien a las claras, que estamos frente a un problema global en el cual no hay elementos autónomos causales, sino que se trata de un proceso multicausal que impacta multivariadamente y que en consecuencia requiere soluciones del mismo orden. Si los factores que dan origen a un desastre son de naturaleza múltiple, la respuesta a los mismos debe ser idéntica, y ello requiere de una coordinación con todas las instituciones que trabajan en el área. Estas soluciones básicamente son las de un programa de desarrollo regional y todo plan al respecto debe comprenderse dentro de planes nacionales mayores.

El cuadro que muestra la ciudad y su área de influencia no es producto del azar sino que pone de manifiesto la fragmentación institucional que ha padecido el país todos estos años; la parálisis de los organismos sociales que se prolonga en la incoherencia de los instrumentos de gestión.

En primer lugar, el autoritarismo dominante en esos años se asentó sobre un modelo ideológico y luego conceptual que parceló la realidad ocupándose de aspectos fragmentados de la misma, que no aparecían interrelacionados entre sí. (Por ejemplo, la inundación y la pobreza no se articulaban. La respuesta lineal a la inundación es una obra de ingeniería hidráulica y no la transformación de la realidad socioeconómica de la población marginada.)

En segundo lugar, y a pesar de las buenas intenciones individuales, reveló la ineficiencia e inoperancia del sistema de asistencia social frente a una situación crítica masiva, evidenciando que se encuentra desarmado cuando debe atender deficiencias estructurales.

En tercer lugar, las políticas sociales durante todos estos años ahondaron la reproducción de un orden social desigual. No es causal que con las inundaciones de 1982 y 1983 los primeros y verdaderos damnificados, aquéllos que se quedaron sin lo poco que tenían (su rancho y elementos de trabajo) sean justamente los sectores marginales de la sociedad.

La catástrofe padecida en el Gran Resistencia pone de manifiesto la debilidad de los sistemas de información, de previsión, de planificación y de intervención, así como la carencia de una verdadera proyección social capaz de tomar en cuenta las necesidades básicas de la población.

Revisando la experiencia internacional y la nuestra, se puede afirmar que la clave para la asistencia efectiva y para la rehabilitación

de un espacio sujeto a catástrofe es la fuerza organizativa y la flexibilidad para implementar soluciones. Ello requiere de la existencia de una institución que coordine con todos los sectores del Gobierno Nacional y Provincial y que esté en condiciones de responder rápidamente y con decisión y seguridad a lo imprevisto o cuando surja la necesidad. La rehabilitación de un espacio social requiere un mayor grado de preparación, de habilidades y recursos que la organización del socorro en sí mismas. Ello implica tener un plan de desarrollo que vaya más allá de la mera respuesta a la emergencia, lo cual requiere un grado de preparación, de habilidades y de recursos que no son otra cosa que una planificación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo que permitan dirigir con mayor eficacia la organización del socorro cuando sea necesaria y que, a su vez, prevenga a la sociedad del desastre con respuestas adecuadas que minimicen el riesgo o los efectos cuando se produce el evento.

Salvo que exista un plan para relocalizar a la población, rápidamente surge una presión para retornar al estado anterior. Esto se puede apreciar claramente en el Gran Resistencia, donde buena parte de la población marginal volvió a asentarse en los sitios anteriores. Salvo raras excepciones, la acción de los organismos públicos tiende a solidificar la situación previa existente, sin promover cambios básicos en la sociedad.

Dado que lo que falla en estos casos es la concepción que la sociedad y sus estructuras institucionales tienen del desastre, los trabajos de investigación o de reflexión sobre estos temas, debieran tender a formular estrategias o modelos de acción que alteren este orden y apunten a modelar respuestas ajustadas a las condiciones de nuestra sociedad. Puede ser que esta respuesta se encuentre a través de la organización de una sociedad que no esté dirigida hacia el beneficio a expensas de todos los valores humanos, sino a la satisfacción de las necesidades sociales como primera prioridad.

A manera de epílogo

“...Y así sucedió que lo primero que vi al salir de nuevo a la calle fue a una persona llena de escamas; me horroricé al pensar en la enfermedad tan terrible que padecería, pero seguí andando y más adelante vi a otra en las mismas condiciones, y luego otra y otra. Hasta que por fin interrogué a un anciano. “¿Pero de dónde es usted?”, me dijo. Y yo le dije de dónde era, y él echó a reír y me preguntó si eso quedaba al otro lado del mundo. Y por último me contó que lo que yo había visto era cierto, que hacía unos cuantos años había llegado un ingeniero famoso a la ciudad, dispuesto a desecar uno de los grandes lagos. El ingeniero empezó a hacer un túnel para que saliese el agua y mientras tanto cerró todos los desagües naturales, de modo que toda la ciudad quedó inundada, hasta que fue constituido el desagüe artificial. Pero al quedar terminado, al Virrey no le gustó, pues el agua no se veía fluir ya que todo era subterráneo, y alegó que podría ser obra de brujería. El ingeniero se ofendió. Tapó el túnel. Y la ciudad se volvió a inundar, hasta que el Virrey accedió a reconocerle los méritos y la ciudad fue destaponada. Pero

luego no se puso de acuerdo con el ingeniero en cuanto al precio a pagar. Y la ciudad volvió a ser taponada y el ingeniero acusado de hereje, motivo por el cual dicen que desapareció por el interior de sus túneles, destruyendo todas las compuertas y llaves de paso. Y con este taponeo y destaponeo, la ciudad se vio inundada por dos veces al año y luego seca. Y luego nuevamente inundada. De manera que a la gente no le quedó otra alternativa que adaptarse. Y muchos se volvieron peces. Y otros, que tardaron más en metamorfosearse, quedaron en medio del cambio: mitad peces y mitad hombres. Los más conservadores permanecieron sobre los techos o dentro de las balsas y bateas y no perdieron la figura, aunque muchos se murieron de hambre. Cuando por fin el lago fue desecado, los peces agonizaron entre los fangales y los hombres volvieron a su lugar. Y los medios-peces ahí están, cargando con su indecisión. El Virrey, que se había convertido en un hermoso pargo, pudo llegar hasta el océano y allí dicen que está: lanzando maldiciones, pero sin poder salir a la costa... Eso me contó el anciano y en mucho me ayudó a formarme una idea de cómo marchaban las cosas en el Virreinato."

De El Mundo Alucinante (Una novela de aventuras) de Reynaldo Arenas. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970. Basada en la biografía de Fray Servando Teresa de Mier.

ANEXO I

Misiones de cooperación técnica internacional

1. FAO *, "Prevención y control de las inundaciones con motivo de las crecidas del río Paraná, 1982-1983", septiembre de 1983.
Recomienda crear una institución estable que coordine las acciones de los organismos nacionales y provinciales dentro del contexto de coordinación de la Cuenca del Plata, y que implemente un programa de acción a mediano y largo plazo con el objeto de dar seguridad a los asentamientos humanos, a las obras de infraestructura y a las tierras de alto valor productivo. La misión realizó, además, otros proyectos solicitados por el Gobierno Argentino al Programa de Cooperación Técnica de la FAO:
 - Protección hidrológico-forestal y rehabilitación de áreas afectadas por las inundaciones.
 - Defensa y rehabilitación de tierras susceptibles a las inundaciones.
 - Protección contra las inundaciones y el desarrollo integrado del delta del Paraná.El gobierno debe hacer ahora la presentación oficial para poder implementar estos proyectos.
2. Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat, Nairobi), "Anteproyecto de asistencia técnica del Centro de las N.U.-Habitat a la Dirección de Desarrollo Urbano y Vi-

* FAO: Food and Agriculture Organization

vienda de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación", octubre de 1983.

De este anteproyecto surgieron los lineamientos para desarrollar un proyecto definitivo de rehabilitación y reubicación de las ciudades afectadas. Los objetivos principales del mismo son:

- Formular propuestas de políticas tendientes a asegurar la realización de los proyectos y la adopción de las medidas de prevención, mitigación y auxilio.
- Los expertos extranjeros prestarán asistencia técnica y deberán preparar y cooperar en la ejecución de un programa de capacitación para técnicos y funcionarios provinciales y municipales principalmente.
- Implementar dos proyectos pilotos a realizarse en dos asentamientos a seleccionar.

El proyecto definitivo se realizará cuando las partes interesadas lleguen a un acuerdo: Habitat-Nairobi por un lado y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por el otro.

3. OMS/OPS *, "Propuesta de emergencia para la rehabilitación de la infraestructura básica de la salud ambiental y apoyo a la atención primaria en las zonas afectadas por las inundaciones de las provincias del Noreste de la República Argentina", noviembre de 1983. Enumera una serie de sugerencias y recomendaciones entre las cuales plantea la necesidad de reordenar el plan nutricional existente a través de los comedores escolares, en tanto en la mayoría de los casos el suministro de alimentos no llega eficazmente a los escolares, y sugiere que se integre a organismos no gubernamentales tales como Cruz Roja, Caritas, etcétera, en este plan dado que disponen de productos alimenticios y recursos humanos como para ofrecer una dieta con contenidos balanceados.

ANEXO II

Acciones a nivel nacional en los diferentes sectores

Salud. No existen programas sanitarios especiales para hacer frente al impacto de las inundaciones. Durante el período crítico no se reforzaron las acciones pertinentes. Se giraron los fondos pertenecientes a los programas asistidos de salud ya existentes, fundamentalmente al de atención primaria. La Nación supone que la provincia, como organismo fundamental de este programa, adoptó conductas pertinentes a la emergencia, tales como incrementar los controles sanitarios de la población afectada y en caso de necesidad derivarlos a los hospitales locales.

Dentro de esta misma área (la de salud pública y acción social) la Dirección Nacional de Emergencias Sociales (dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social) realizó una gran campaña de solidaridad para recaudar fondos y elementos que fueron transferidos al gobierno provincial. Se enviaron elementos por un valor aproximado de 100 000 dólares desde agosto de 1982 hasta septiembre de 1983,

* Organización Mundial de la Salud. / Organización Panamericana de la Salud.

fecha en que el río comenzó a descender y la Dirección Nacional de Emergencias Sociales dejó de operar. Para esta Dirección ha finalizado el periodo crítico aunque la población se encuentre en calidad de evacuados o los sitios sigan inundados. El problema es entonces de exclusiva competencia de la provincia, la cual, a su vez, asume la misma conducta y en el mismo momento decide dar por finalizada la asistencia.

Económico. A las provincias afectadas se les adjudicaron fondos aislados, pero la mayoría de éstos formaban parte del presupuesto provincial y no existió un cupo extra destinado a paliar el efecto de las inundaciones o a poner en marcha las obras paralizadas o rehabilitar lo inutilizado. Esto conduce a la provincia a utilizar los fondos, normalmente destinados a otras áreas, para solucionar los problemas causados por las inundaciones, creando un deterioro en sus actividades normales.

Los créditos otorgados a la provincia resultaron insuficientes. A su vez, la situación inflacionaria contribuyó a la disminución de su valor. El Banco de la Nación otorgó al Banco del Chaco dos líneas de créditos; la primera, en mayo de 1983, por \$a 15.000.000 (U\$S 1 = \$a 7,80) equivalente a 1.920.000 dólares para cobrar el 75 % de la tasa regulada para individuos o empresas que demostrasen daños patrimoniales. La segunda entre junio y julio de 1983, por un monto de \$a 27.500.000 (U\$S 1 = \$a 9,4) equivalente a 2.900.000 dólares, para cobrar al 50 % para pequeñas y medianas empresas afectadas pero que por el estado de endeudamiento de las mismas se debieron utilizar para pagar créditos anteriores. En junio del mismo año se otorgaron a la provincia \$a 321.000.000 (U\$S 37.500.000) para atender la emergencia. De éstos, 8.000.000 de dólares correspondían a los aportes regulares de los meses de junio y julio del tesoro nacional, y los 27.500.000 dólares restantes se otorgaron a la tasa de redescuento corriente, al Banco del Chaco. De acuerdo a lo publicitado, estos fondos debían ser destinados para la reactivación de los servicios públicos, la construcción de defensas y la rehabilitación de la red caminera.

En cuanto a las medidas nacionales de orden impositivo, se otorgaron prórrogas que fueron aplicadas tardíamente.

Vivienda. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgó durante 1983 a los Institutos Provinciales de Desarrollo Urbano y Vivienda de las provincias afectadas por la inundación, fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), que no formaban parte de su presupuesto anual, para la construcción de 2.000 viviendas, de las cuales 300 fueron adjudicadas al Chaco donde se construirán 140 y 60 unidades en Resistencia y otras 100 en Barranqueras. Este proyecto se encuentra en la etapa de financiamiento y se realizará mediante un sistema de construcción tradicional racionalizado. Las viviendas serán adjudicadas a familias inundadas.

En cuanto a líneas crediticias, el Banco Hipotecario Nacional acordó préstamos hipotecarios *individuales* para la reparación de casas afectadas por la inundación, a través de la resolución N° 276/83 del directorio del 15 de mayo de 1983. Hasta marzo de 1984 se habían otorgado 13 préstamos en Resistencia por un valor de \$a 4.124.966, es decir, cerca de 350.000 dólares.

Aún está pendiente una operatoria colectiva destinada a la población de bajos recursos.

Recursos hídricos. La Secretaría Nacional de Recursos Hídricos está trabajando en un plan de estudios, proyectos y obras para el manejo de las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay. En él están incluidos la realización de todos los estudios básicos necesarios para conocer el funcionamiento del sistema; proyectos para disminuir la vulnerabilidad ante crecidas, entre ellos la creación de centros de previsión y alerta de crecidas (que ya está funcionando, desde febrero de 1983, en el INCYTH *); la regulación del uso del suelo y la relocalización de zonas vulnerables (junto con la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda); un plan de obras de rectificación y profundización de cauces y de presas de protección localizadas. Para estas últimas, la provincia deberá realizar el/los proyectos ejecutivos, pero manteniendo siempre reuniones con la comisión de trabajo del plan de manejo de la cuenca que está integrada por el secretario de Recursos Hídricos (quien la preside), un representante del Ministerio del Interior y representantes de cada una de las provincias del Nordeste argentino.